

¿Suspender las conversaciones de La Habana?

Artículo publicado en Razón Pública el 21 de octubre de 2013^[1]

La “encuesta” de Santos

En días recientes el presidente Santos hizo un sondeo entre los parlamentarios del Partido de la U, preguntándoles si debía terminar, suspender temporalmente o continuar las conversaciones de La Habana. El resultado de la “votación” fue favorable a que las continuara.

Es posible que los medios no hayan explicado suficientemente las circunstancias de semejante consulta, pero parece criticable que una reunión de parlamentarios del partido de gobierno se use como escenario para auscultar la opinión pública. Sin que el presidente sustentara la pregunta, ni los congresistas justificaran sus respuestas; como si fuera una cuestión de gustos, o, tal vez, de inconfesables cálculos electorales.

La tal “encuesta” desató la controversia –siempre saludable– pero tuvo un efecto negativo sobre la imagen pública del proceso de La Habana. Si el presidente, que tiene información de primera mano, contempla la posibilidad de romper las conversaciones, ¿qué puede esperarse de la mayoría de los colombianos que parecen no percibir ningún avance o resultado concreto del proceso?

El episodio viene a confirmar el cambio que ha ido sufriendo la imagen del presidente Santos: de arrojado tahúr se ha convertido en jugador maniatado por una aguda aversión al riesgo electoral. Hasta tal punto que uno lo cree capaz de levantarse de la mesa de La Habana al calor de alguna encuesta. ¿Será este el famoso “Estado de opinión”?

Suspender el proceso

De las tres opciones presentadas por Santos, la que más se ha discutido es la de suspender las conversaciones de La Habana hasta después de las elecciones. Esto tal vez se debe a que la opción les sirve a dos tipos de interesados:

1. Los uribistas, que ven en ella la cuota inicial de la ruptura definitiva de los

diálogos;

2. Los tácticos, que siendo amigos de la solución política del conflicto, no quieren pagar los costos electorales o de reputación resultantes de apoyar este proceso concreto de diálogo con las FARC.

¿Las elecciones periódicas no son acaso el emblema de cualquier democracia? ¿Cómo puede proponerse que el asunto más grave para Colombia en el futuro mediato e inmediato – la solución del conflicto armado – sea sustraído del debate electoral?

La estrategia de Uribe

Los uribistas afirman que suspender las conversaciones permitiría “aislar” las elecciones –sobre todo la reelección– del proceso de La Habana. Ellos, en breve, no quieren que el presidente Santos saque rédito electoral de la negociación. Si esta lógica se aplicara retrospectivamente para garantizar la transparencia de la reelección del presidente Uribe habría sido necesario suspender la política de Seguridad Democrática esto es, detener la guerra contra las FARC mientras pasaban las elecciones.

El mensaje uribista, como siempre, es elemental: se vale utilizar los triunfos militares como un activo electoral, pero invocar el mérito de atreverse a buscar la paz por la vía negociada es una cruda “maniobra electorera”. Es de esperar que Uribe Centro Democrático siga haciendo campaña descalificando ruidosamente todo lo que no huela a “guerra a muerte contra el narcoterrorismo”. Y que aplicará su táctica electoral de degradar, degradar y degradar el proceso de La Habana.

Pero lo más desalentador es otra cosa: que el Presidente parezca creer que la manera de responder a estas críticas es aceptar “acriticamente” la validez de las mismas. ¿Será capaz de suspender los diálogos ante la presión de Uribe y sus amigos?

Paz sin pagar el precio

Se ha dicho ya que las encuestas prueban la inconsecuencia de la opinión colombiana. Se dice que la mayoría de los encuestados apoya la salida negociada pero rechaza dos resultados necesarios de un acuerdo de paz: el tratamiento penal alternativo de los guerrilleros y su participación en la política.

Es decir, los ciudadanos quieren los beneficios de la negociación (entre otras razones, por la superioridad moral de esta opción frente a la vía militar) pero no quieren asumir los costos propios de la solución negociada de un conflicto armado interno.

Esta creencia es una imagen espejo de lo que en efecto piensan muchos de los voceros de los partidos, de los precandidatos a la Presidencia, de los columnistas y comentaristas, de los líderes empresariales y sociales. Ellos no atacan el proceso de paz, pero tampoco lo apoyan de manera consistente. Y para hacer presentable esta posición hacen uso de múltiples argumentos.

Uno de estos es sostener que las negociaciones deben ser suspendidas para que el noble propósito de la paz no caiga en las garras del envilecido proceso electoral. Introducir el proceso de paz en el debate electoral no es mejorar las elecciones sino rebajar la aspiración de paz del pueblo colombiano. Mejor entonces que el debate electoral se reduzca a los egos, el dinero, la maquinaria y la banalidad.

El argumento en cuestión es abiertamente antidemocrático. ¿Las elecciones periódicas no son acaso el emblema de cualquier democracia? ¿Cómo puede proponerse que el asunto más grave para Colombia en el futuro mediano e inmediato - la solución del conflicto armado - sea sustraído del debate electoral?

El objetivo primario de las elecciones es elegir gobernantes, pero ¿acaso los gobernantes no han de ser elegidos sobre la base de sus propuestas para resolver los principales problemas del país?

Finalmente, ¿quién puede creer que suspendiendo las conversaciones de La Habana durante las elecciones, la negociación con las FARC dejará de gravitar sobre el debate público? Pensar eso es una verdadera necedad.

Un argumento mezquino

Los no uribistas que serían adversarios electorales de Santos usan otro argumento para pedir que se suspendan las conversaciones: evitar que la suerte del proceso quede atada a la eventual reelección de Santos.

Se trata de otra actitud inconsecuente. Quienes apuestan por la solución política pero no desean la reelección de Santos tendrían que asumir la bandera de la paz negociada y aspirar a reemplazar al presidente para llegar mejor a ese objetivo.

Nada indica que lo acordado en La Habana con las FARC, o lo que se acuerde en los meses que faltan para elegir al nuevo presidente, tenga un alcance tal que deba ser declarado inaceptable por un nuevo gobierno, a menos que sea uribista. Pero además, siempre es posible revisar los acuerdos sin producir la ruptura de las conversaciones, porque estas han procedido sobre la base de que “nada está acordado, hasta que todo esté acordado”.

Esta medrosa posición acaba siendo más mezquina que el utilitarismo santista que pretende combatir. El propósito estratégico (la solución política del conflicto armado) se subordina al cálculo electoral (evitar la reelección de Santos). Para quienes creen en la vía negociada, lo primordial sería salvar las conversaciones de La Habana. Si varios candidatos o partidos apoyan el proceso, el elector podrá escoger aquel partido o candidato que prefiera, sin que por eso reste del apoyo popular a las conversaciones.

En un sistema político más maduro, ese objetivo podría lograrse a través de un “pacto nacional por la paz”, como lo han sugerido algunos columnistas. Pero el sistema colombiano se caracteriza por el fraccionamiento personalista -a pesar de la mentada Unidad Nacional- y por unos dirigentes vocingleros pero timoratos que le temen a acordar propósitos comunes más allá de las fronteras partidistas.

Lo que sigue

No incluí en este análisis a quienes han propuesto suspender las conversaciones por razones distintas de las aquí expuestas. Tampoco me he referido a las FARC, aunque también a ellas se les debe exigir mayor celeridad para llegar a acuerdos en el segundo punto de la agenda.

Pero en lo que respecta al gobierno y a las opiniones que he analizado, creo que para que los diálogos puedan seguir su camino tendrían que atenderse varias necesidades:

- No dejar que el uribismo siga imponiendo la agenda en materia de guerra y paz. Hay que decir que a ello contribuyen el ministro de Defensa y el anuncio presidencial de los cincuenta mil hombres destinados a combatir los bloques Sur y Oriental de la guerrilla.
- Hay que romper la identificación entre salida negociada y pusilanimidad

que se ha venido construyendo en el imaginario colectivo. Para llegar a la paz se necesitan personas más valientes que para hacer la guerra.

- Esa gran cantidad de organizaciones sociales, de políticos, de columnistas, que llevan años promoviendo la solución política del conflicto armado, deben abandonar la actitud vergonzante frente a los diálogos de La Habana, por el temor a ser identificados como santistas o reeleccionistas. Reconocerle a Santos el valor de haber iniciado esa difícil negociación con las FARC y conducirla con relativo buen tino, no lo convierte a él en dueño y señor de la paz.
- La apatía generalizada no puede avalar el comentario del presidente Santos según el cual “no perdemos nada si fracasan los diálogos... [pues] volvemos a como hemos vivido los últimos 50 años”. Por el contrario, si fracasan los diálogos, con cualquier presidente, perdemos mucho, muchísimo. No parece razonable permitir que ello ocurra.

Referencias

¹. ^21 de octubre de 2013 (www.razonpublica.com)
